

## **AGENDA CIUDADANA**

### **MEXICO Y SUS GUERRAS**

Lorenzo Meyer

**La Guerra.-** En la actualidad México es escenario de dos guerras de baja intensidad. Una de origen y naturaleza abiertamente políticas, y que opone a dos organizaciones insurgentes en el centro y sur del país -el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR)- al gobierno mexicano; la otra, sórdida, brutal y alimentada por los peores instintos del hombre, esta la llevan a cabo las organizaciones criminales contra la sociedad en su conjunto, y ahí los delincuentes cuentan con la complicidad o ineficiencia de un régimen que hace tiempo desistió de actuar dentro de los marcos del Estado de Derecho.

Se trata, obviamente, de guerras opuestas en sus razones y objetivos, pero que provienen de la misma raíz: la histórica corrupción del régimen, del gobierno y de la clase política así como de una agudización del contraste e injusticia sociales. En ninguno de los dos casos existe una salida fácil, pero es obligación ciudadana demandar que el gobierno y los insurgentes busquen una solución negociada, honorable y, sobre todo, constructiva, pacífica y no militar, del conflicto. Esto es necesario, entre otras razones, para reconstruir la moral cívica, disminuir la polarización política, dar forma a un verdadero Estado de Derecho y concentrar la energía colectiva en el combate a fondo del enemigo insoportable: el crimen organizado, que ha llegado al punto de hacer vivir a México más cerca del Estado de naturaleza de Hobbes -donde la lucha sin piedad de todos contra

todos lleva a que el fuerte destruya al débil- que a la supuesta modernidad que desde hace tres sexenio prometieron los tecnócratas que hoy se muestran impotentes para cumplir con una responsabilidad básica: garantizar la seguridad a los gobernados.

**Definición.**- Pero los conflictos mencionados, tan disímiles, ¿se pueden calificar realmente como guerras? La raíz del término es alemana -werr- y significa confusión, discordia o contienda. Obviamente los tres términos caben, en mayor o menor grado, en la descripción de los problemas de referencia, pero si se requiere de una definición más específica, entonces se puede considerar a la guerra como un estado de hostilidad abierta, armada, entre entidades políticas, que pueden o no ser estados.

En el México de hoy, si existe un estado de hostilidad armada entre los remanentes del viejo régimen de partido de Estado y las organizaciones guerrilleras que operan en el centro y sur del país. Por otro lado también hay otro estado de hostilidad violenta entre las poderosas entidades económicas y políticas transnacionales que son los varios carteles del narcotráfico -que cuentan incluso con asesoría de ex militares extranjeros-, así como meras bandas criminales con relación orgánica con la autoridad -secuestradores, asaltabancos, robacoches, ladrones de transportes, etcétera- y la sociedad mexicana en su conjunto.

La viabilidad de México como nación requiere poner fin a ambos conflictos por ser incompatibles con un proyecto nacional donde impere la justicia formal y social, y donde la calidad de vida corresponda a la que se describe tanto en la constitución

como en los grandes documentos históricos y en las plataformas de los principales partidos políticos que hoy debieran ser, los medios para procesar las demandas de una sociedad que exige empleos, educación, salud, vivienda, distribución equitativa de tareas y beneficios, justicia expedita y seguridad.

En virtud de las diferencias radicales de las dos guerras, las soluciones tienen que ser igualmente diferentes: una negociada y pacífica, la otra aplicando la ley. Pero en ambos casos es requisito de éxito revertir la corrupción histórica de la autoridad y construir un entorno económico que permita, realmente, contar con la alternativa de un trabajo digno para los millares de jóvenes que ya se iniciaron o están por iniciarse en la redituable -y por tanto racional- carrera criminal.

**La Guerra Política.**- Por razones de espacio en importancia voy a concentrarme en el conflicto netamente político. El EZLN y el EPR son productos muy decantados de la maduración del radicalismo político de quienes en los años sesenta y setenta buscaron transformar a México mediante un cambio violento y a fondo del modelo político y económico imperante. Inspirados por la Revolución Cubana y por otras fuentes del pensamiento de izquierda, campesinos, maestros y estudiantes mexicanos se enfrentaron con las armas al autoritarismo y a la corrupción del PRI y del capitalismo subdesarrollado en nombre de ese "hombre nuevo" que el Che Guevara buscó en Cuba, el Congo o Bolivia. La lucha tuvo lugar lo mismo en Chihuahua que en Guerrero, en la capital, en Monterrey o Guadalajara. Fracasaron, pero algunos de los sobrevivientes persistieron porque finalmente el régimen

triunfó pero no cambió su naturaleza íntima sino apenas la forma: reforma electoral para mantener al partido de Estado en compañía de partidos impotentes, populismos corruptos, solidaridades sin verdadera comunidad de intereses. Sin embargo, el terrible castigo económico que a partir de 1982 se impuso a las clases populares, en particular a los campesinos, fueron el nuevo caldo de cultivo para que los activistas radicales sobrevivientes de los sesentas reanudaran la marcha. De ahí el EZLN y el EPR.

Obviamente la insurgencia actual ya no es similar a la de hace treinta o veinte años. Hoy tiene que tomar en cuenta el fracaso del "socialismo real"; no puede pretender la toma armada del poder por la élite revolucionaria para llevar a cabo la construcción de un régimen socialista. Sus metas son más modestas; ambos movimientos, con lenguaje y formas de lucha diferentes -el EZLN tiene un territorio más o menos definido y una identificación con una vieja cultura indígena, en tanto que el EPR es una guerrilla más clásica- se proponen ser meros catalizadores de una lucha más amplia, no armada, que busca la democracia política y la justicia social, pero ya no la dictadura del proletariado, la estatización de la economía o la abolición de la propiedad privada. En una palabra, son movimientos que ya perdieron, o deberían haber perdido, la certeza de conocer "científicamente" la naturaleza y propósito del cambio histórico.

**La Negociación.**- Al concluir la I Guerra Mundial, en 1919, George Clemenceau señaló que "es más fácil hacer la guerra que la paz". Quizá no todas las experiencias históricas avalan al estadista francés, pero su visión es válida aquí y hoy.

Desde 1994 se iniciaron las negociaciones del gobierno con el EZLN y hasta hoy no se ha avanzado casi nada en el camino que lleve a su desarme por la vía de una respuesta razonable a sus demandas, muy justificadas y que son resultado de un agravio histórico terrible y aún no resuelto: la conquista, la discriminación, el despojo, la explotación y la humillación centenarios, más una economía que ya no tiene lugar para la comunidad indígena. Esas demandas no sólo se refieren a cambios en las condiciones materiales de vida de las comunidades indígenas -tierra, salud, trabajo, educación o vivienda-, sino del régimen político mismo. Los rebeldes demandan, por la vía de una autonomía -que no de la independencia- que se reconozca y se acepte en su favor lo que siempre ha sido México: una sociedad compuesta de diferentes civilizaciones, pero ahora dentro de un marco institucional de democracia real, donde la soberanía este, por primera vez, en manos del ciudadano.

**La Respuesta.**- Hasta ahora el gobierno se ha abstenido de negociar con seriedad con los insurgentes. Tal pareciera que su objetivo haya sido contener militarmente a los dos movimientos en espera de que las elecciones del 6 de julio recargaran de legitimidad a la autoridad presidencial, legitimidad que ha ido perdiendo desde los años sesenta pero, sobre todo, desde el 94. La presidencia autoritaria no cedió a la presión de los armados pero si a la de los partidos de oposición. Esperaba -y espera- que el sacrificio hecho al aceptar por primera vez elecciones en condiciones de relativa equidad en ciertas zonas del país, y que le llevó a perder gobernaturas y la mayoría en la Cámara de

Diputados, le permita aislar a los grupos rebeldes y contar en ese proceso con el apoyo o al menos la anuencia, de los ganadores del 6 de julio: los partidos de oposición.

En función de los cálculos anteriores, el discurso de la presidencia y de sus voceros oficiales es el siguiente: México entró finalmente en la legitimidad democrática, por tanto la acción armada del EZLN y del EPR carece ya de razón de ser, porque hoy la estructura de autoridad no es sólo la del PRI y su presidente, sino también la de la oposición legal a la que respaldan 17 millones de votos.

El discurso anterior sólo es parcialmente verdadero. Es cierto que el 6 de julio de 1997 se abrió la posibilidad de un cambio político histórico en México, pero de ningún modo se le puede igualar a la transición democrática; en el mejor de los casos es su inició, pues aún queda mucho por andar antes de que se considere irreversible el cambio. En segundo lugar, el sur mexicano, donde están los rebeldes, es hoy por hoy el valuarte del terrible "sindicato de gobernadores" -Manuel Bartlett, Cervera Pacheco, Roberto Madrazo *et al*- es decir, una base del viejo orden. Ahí, el 6 de julio no fue el punto de inflexión político que sí fue en muchos otros puntos del país. En esa zona las elecciones no se dieron, ni de lejos, en condiciones de relativa equidad y, por tanto, ahí continúa funcionando el sistema de partido de Estado. En tercer lugar, el sur es la zona de México donde la supuesta "magia del mercado" ha tenido el mayor impacto negativo: con o sin 6 de julio, ahí se concentra la miseria, la falta de educación, los más altos indicadores de

insalubridad, la ocupación militar, el caciquismo, las acciones de las organizaciones paramilitares y la violación de los derechos humanos, tal y como lo mostró la reciente visita del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nigel Rodley.

**La Negociación como Imperativo.-** Suponer, o pretender suponer, que el 6 de julio le dan al gobierno de Ernesto Zedillo la fuerza moral para imponer sus condiciones a quienes se levantaron en armas en 1994 y 1995, es ignorar que ambos movimientos son resultado de un proceso que se inició hace un buen número de años, cuando aún no había salida electoral, y que los últimos resultados de las urnas todavía no tienen ni tendrán ningún efecto sustantivo en lo que realmente le importa a las bases sociales de las guerrillas: cambios efectivos en sus condiciones de vida y de acción política. Ahora bien y en contraste, los movimientos armados no pueden ignorar que las últimas elecciones sí cambiaron de manera muy importante el panorama político mexicano, que abrieron posibilidades de acción política pacífica y efectiva, y que la mayoría de los que votaron a lo largo del país ni quieren ni creen en la lucha armada como el medio para transformar su entorno político y económico.

Negociar, implica comunicarse con el otro a fin de llegar a un compromiso sobre un tema donde existen diferencias. Negociar significa que la diferencia de intereses se mantiene, pero aminorada, pues si bien se cede en algo también se gana en algo. Negociar, en fin, supone que no se puede, se quiere o se debe eliminar la diferencia destruyendo al otro. La salud pública de

México requiere resolver una de sus guerras por la vía de la negociación -la que existe entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno- y ganar la otra -la de la sociedad contra el crimen organizado- por la vía de la construcción del Estado de Derecho y la reconstrucción de las instituciones.